

Primer plano

En el Catatumbo se recrudece la violencia: 23 muertos en un día

Guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc tiene en jaque a la población. Ejército desplegó 300 uniformados.

El horror de la guerra volvió a tomarse el Catatumbo (Norte de Santander) como no se veía hace más de dos décadas. Pero la difícil situación de orden público que allí se vive no es algo de ahora. Las cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las autoridades locales son un reflejo de la crisis humanitaria que atraviesa esta región fronteriza, que durante décadas ha sido azotada por la violencia, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.

Según el CICR, en su más reciente balance, más de 1.250 personas fueron desplazadas de forma masiva, mientras que los desplazamientos individuales alcanzaron los 10.220 casos en el departamento durante el 2023. Además, Norte de Santander ocupa la cuarta posición en casos de desaparición, con 16 confirmados. En cuanto a los homicidios, el Observatorio de Orden Público, Social y Político de la Gobernación de Norte de Santander reportó 516 homicidios en 2024, una tendencia que, con excepción de 2014, 2015 y 2022, ha superado los 500 homicidios anuales en la última década.

En Tibú, epicentro de la violencia en el Catatumbo, la presencia del Estado es limitada. La policía permanece resguardada en las estaciones por temor a ser atacada, y desde el asesinato de la fiscal especializada Esperanza Navas en 2021, no hay oficina de la Fiscalía en el municipio. Los fiscales encargados de los casos deben trabajar desde el búnker en Cúcuta.

Precisamente en la vía Tibú-Cúcuta ocurrió el crimen del tanatólogo Miguel Ángel López y parte de su familia, baleados en el carro fúnebre en el que se movilizaban la noche del miércoles. Las víctimas fatales fueron él; su esposa, Zulay Durán Pacheco, y su bebé de menos de un año. La Alcaldía confirmó que en el carro también iba su hijo de 10 años, quien sobrevivió.

A pesar de que el Eln aseguró no tener “ninguna responsabilidad en los hechos” por medio de un comunicado y culpó a las disidencias, EL TIEMPO tuvo acceso a documentos de agencias de inteligencia que aducen lo contrario. “López habría realizado en las últimas semanas el levantamiento de personas que habían sido asesinadas por estructuras del frente de guerra Oriental del Eln señaladas de pertenecer al frente 33 de las disi-



Familiares y amigos dan el último adiós a Miguel López, su esposa y su bebé de pocos meses, asesinados en Norte de Santander. FOTO: AFP

dencias de las Farc”, se lee en los archivos. Añaden que la guerrilla había ordenado no recoger los cadáveres y López, sin tener idea de que preparar y sepultar los cuerpos lo pondría en la mira del grupo armado, llevó a cabo su labor y por eso habría sido asesinado junto a sus familiares.

Los combates

Como si se tratara de hechos consecuentes, el jueves en la mañana se reportaron múltiples combates en la región. La estructura 33 del ‘Estado Mayor de los Bloques’ (Emb), comandada por alias Calarcá, y el Eln son los grupos involucrados en el conflicto que tiene cinco municipios de esa zona seriamente afectados: Convención, Hacarí, El Tarra, Teorama y Tibú. En videos se ha evidenciado cómo los miembros del Eln, con armas de alto alcance y actitud amenazadora, golpean y dan patadas a puertas en viviendas de familiares de firmantes de paz para secuestrarlos y arremeter contra sus vidas.

Según el puesto de mando unificado (PMU) que se instaló en el departamento, hasta la noche del jueves iban 23 muertos -entre ellos cinco excombatientes según Indepaz- y ocho heridos. Sin embargo, en la reunión de ayer se habló de 30 muertos, los cuales al cierre de esta edición no se habían podido confirmar. En la región se declaró la alerta amarilla en hospitales y se suspendieron las clases. Además, en lo que ya se considera el mayor ataque guerrillero en el gobierno Petro, ya se presenta una crítica situación de confinamientos y desplazamientos.

La Procuraduría informó anoche que en Cúcuta se declaró la emergencia humanitaria. “En las últimas horas han llegado 70 desplazados desde Sardinata y Tibú, mientras que en el Seminario de Tibú se refugian 120 personas provenientes de ‘Campo 3’ y La Gabbarra”, detalló el ente de control.

Fuentes de la Fuerza Pública indicaron que esta ola de violencia se debe, en gran parte, a la pelea que mantienen el Eln y el Emb por el control del corredor Tibú-Cúcuta, usado para sacar grandes cantidades de coca. Según los recientes datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Norte de Santander tiene más de 30.000 hectáreas sembradas.

Entre tanto, en un comunicado firmado por el frente de guerra Nororiental y conocido por fuentes del Ejército, la guerrilla señaló que “seguirá corriendo sangre en el Catatumbo” hasta que ‘Richard’, de las disidencias, se entregue. “Hacemos un llamado a todos los comerciantes, al gremio de mototaxistas de Tibú, a El Tarra y sus alrededores y a todos los que colaboran con dinero a esta cúpula, que dejen de hacerlo o serán declarados objetivo militar”, dice la comunicación. Además, incluyen como objetivo a Ecopetrol, Disico y Cens.

La grave situación en el Catatumbo llevó a que el Ejército anunciara ayer el despliegue de 300 uniformados para consolidar el control en esa región. “En coordinación con la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC), el Ejército también ha desarrollado operaciones de evacuación para trasladar a las personas heridas en medio de los en-

frentamientos armados”, informó Presidencia en un comunicado.

Entre las evacuaciones se destaca la del líder campesino José del Carmen Abril, quien temía por su vida tras denunciar que el Eln lo buscaba para asesinarlo. El Ministerio de Defensa detalló que, junto con a él, se logró el traslado de un grupo de 18 personas que estaban en situación de riesgo. “Las acciones del Eln, que violan el DIH y generan desplazamiento, no quedarán impunes. Nuestra Fuerza Pública actúa con firmeza para devolver la tranquilidad a la región”, agregó la cartera en X.

En conversación con EL TIEMPO, Diego Ferney Tovar Henao, conocido como Federico Montes, integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación que la próxima semana se plantará frente al Consejo de Seguridad de la ONU, habló sobre las amenazas que los firmantes habían recibido meses antes del ataque y de la responsabilidad del Gobierno en esta crisis. “Habíamos advertido que no definir claramente las reglas en el manejo de las mesas negociación con los diferentes actores armados de cara a la población firmante, a las comunidades, a los procesos organizativos y los territorios, podría generar una agudización de los hechos de violencia”, aseguró Tovar.

Al respecto, Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UN-Caribe de la Universidad del Norte, dice que el inicio de una guerra en el Catatumbo tiene antecedentes que pasan por la confrontación que hubo entre 2018 y 2019 entre Eln y Epl, que se enfrentaron por el control de territorios y rentas que había dejado el frente 33 de las antiguas Farc. “Esa guerra la ganó el Eln y significó la virtual desaparición del Epl”, apunta. “La Defensoría (...) ya había advertido sobre la eventual confrontación armada entre estos actores armados. En estos documentos quedaba en evidencia que el acelerado crecimiento y expansión del frente 33 estaba produciendo tensiones con el Eln”, añade el académico.

Para Jorge Mantilla, experto en conflicto, esto “también es un colapso del conflicto que se ha venido presentando en Arauca desde hace ya varios años”, lo que se suma a “la intención del Eln, con el apoyo del Gobierno venezolano, de convertirse en el actor más importante de la frontera”.

Desde 2020, el Eln, según fuentes de inteligencia, había restringido la entrada de compradores de pasta base de coca, lo que provocó la reacción de disidencias. “El reto fundamental es entender que ambas organizaciones parecen haber iniciado una confrontación muy grave que tiene como víctimas a los pobladores de esa región”, enfatiza Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.